

PÚBLICO

Índice AI: AMR 51/080/2007

AU 100/07

Penas de muerte / preocupación jurídica

27 de abril de 2007

EE. UU. (Tennessee)

Philip Workman, blanco, de 53 años

Está previsto que Philip Workman sea ejecutado en Tennessee el 9 de mayo a pesar de las abrumadoras pruebas que indican que un testigo de cargo clave mintió en el juicio y que el agente de policía por cuya muerte se condenó a Workman pudo haber recibido accidentalmente un disparo de otro agente. De ser así, Philip Workman sería inocente de asesinato y, según la ley estadounidense, no podría ser condenado a muerte. Workman lleva 25 años en el "corredor de la muerte". Su fecha de ejecución se ha fijado varias veces, y en 2001 llegó a estar a menos de una hora de ser ejecutado antes de que un tribunal dictara una suspensión.

Philip Workman fue declarado culpable del asesinato del teniente Ronald Oliver durante un robo cometido en un restaurante de Memphis el 5 de agosto de 1981. El teniente Oliver y otros dos agentes fueron los primeros en llegar a la escena del robo. En su juicio de 1982, Philip Workman declaró que, cuando huía de la policía, cayó al suelo, trató de entregarse y fue golpeado en la cabeza por un agente. Se oyeron unos disparos y el teniente Oliver cayó muerto de un solo balazo. En el juicio, los otros dos agentes declararon que ellos no habían disparado sus armas, pero admitieron que no habían visto a Workman disparar contra Oliver. Un presunto testigo presencial, Harold Davis, dijo que se encontraba a unos tres metros de distancia y que había visto a Workman disparar al teniente. Los abogados defensores no llevaron a cabo ningún análisis pericial o de balística y no investigaron a Harold Davis. En la fase de determinación de la pena no presentaron ningún testimonio atenuante.

Philip Workman nunca ha negado ser el autor del robo que condujo a la muerte del teniente Oliver, y no ha negado haber disparado su arma. Sin embargo, desde el juicio han surgido pruebas que socavan seriamente la confianza en el veredicto del jurado. El testigo clave de la acusación, Harold Davis, se ha retractado de su testimonio, y los resultados de una prueba del polígrafo respaldan, según los informes, su retractación. También la respaldan otras pruebas. Nadie, ni policía ni civil, vio a Davis en el lugar de los hechos, y su automóvil no se encontraba donde decía haberlo aparcado. Además, se ha presentado un testigo presencial que afirma que al menos uno de los otros agentes disparó su arma. Esto ha sido corroborado por los primeros informes policiales, que dijeron que "agentes" habían disparado sus armas.

Un patólogo forense de renombre nacional, el Dr. Cyril Wecht, ha concluido que la bala que mató al teniente Oliver no procedía del arma de Philip Workman. El doctor basa su conclusión en el hecho de que las balas del arma de Workman eran de un tipo que se expande cuando penetran en el cuerpo, y por lo tanto tienden a no salir de él. La bala que mató al teniente Oliver salió de su cuerpo, dejando un orificio de salida más pequeño que el de entrada. El testimonio prestado por el Dr. Wecht en 2001 no ha sido refutado por las pruebas presentadas por la fiscalía ante ningún tribunal.

En el juicio, la fiscalía presentó la bala que, según afirmaba, había matado al teniente Oliver. Terry Willis, empleado de un negocio cercano de distribución de piezas de automóvil, declaró que, al día siguiente del delito, había encontrado la bala en el aparcamiento (en el centro de la escena del crimen que había sido registrada la noche anterior). En su declaración dijo que había pensado que era un rodamiento y la había guardado en una caja de herramientas, antes de ocurrírsele que quizá podía tener algo que ver con lo sucedido la noche anterior y llamar a la policía. Sin embargo, en una vista de solicitud de indulto celebrada en 2001, un ex teniente de la policía dijo que había sido él, no Willis, quien había encontrado la bala que supuestamente había matado al teniente Oliver. Los abogados que se encargan de la apelación de Workman alegaron también que una foto aclarada digitalmente de la escena del crimen muestra un cono de

señalización de pruebas volcado en el aparcamiento, entre el restaurante y el negocio de piezas de automóvil. Sin embargo, ni el cono de señalización ni el artículo que señalaba aparecen en el diagrama de la escena del crimen, lo que suscita dudas sobre la posibilidad de que se encontrara otra bala cuya existencia no se reveló durante el juicio.

En el año 2000, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, corte federal, votó si conceder a Philip Workman una vista para examinar las nuevas pruebas. Para que se aprobara esta cuestión era necesario un voto mayoritario de la Corte. La nueva vista se denegó porque la Corte quedó dividida en siete votos contra siete. En 2004, un juez de la Corte Suprema de Tennessee manifestó que Workman había planteado “cuestiones jurídicas válidas” respecto a si la muerte del teniente Oliver había sido “resultado de ‘fuego amigo’ y no de sus propios actos ilegales. En concreto, la prueba de que el ‘testigo presencial’ no había visto a Workman disparar al agente y la prueba de que la herida que causó la muerte al agente no coincide con el tipo de herida que habría causado una bala del arma de Workman habrían afectado drásticamente a las pruebas de este caso y, en mi opinión, podrían afectar a la posibilidad de pedir la pena de muerte para el acusado”. Varios miembros del jurado original han manifestado que no habrían votado a favor de una declaración de culpabilidad por asesinato en primer grado o de una condena de muerte si se les hubieran presentado las pruebas que han surgido desde el juicio. En el año 2000, con la ejecución de Philip Workman acercándose de forma inminente, la hija del teniente Oliver y la hija de Philip Workman celebraron juntas una conferencia de prensa para pedir clemencia. El ex fiscal del distrito del condado de Shelby, cuya oficina se encargó de la acusación de Philip Workman, se presentó en el año 2000 para oponerse a la ejecución a causa de las pruebas descubiertas después del juicio.

Un estudio de reciente publicación realizado bajo los auspicios del Colegio Estadounidense de Abogados, que no adopta en sí postura alguna ni a favor ni en contra de la pena de muerte, ha concluido que “la pena de muerte en Tennessee está plagada de problemas graves”. Entre estos problemas, según concluyó el estudio, se encontraban unos procedimientos inadecuados para abordar las alegaciones de inocencia, unas normas inadecuadas de cualificación y actuación para la asistencia letrada, una falta de transparencia en el proceso de indulto, y disparidades raciales y geográficas en la aplicación de la pena capital.

En todo Estados Unidos siguen presentándose recursos judiciales contra la constitucionalidad de los procedimientos de inyección letal, entre las pruebas que señalan que estos procedimientos no garantizan la muerte “humana” e indolora que sus defensores alegan. El 1 de febrero de 2007, el gobernador de Tennessee, Phil Bredesen, publicó una declaración en la que señalaba que las autoridades del estado habían “identificado deficiencias en nuestros procedimientos escritos que suscitan preocupación por la posibilidad de que no sean adecuados para descartar los errores”. Con el fin de “garantizar que en el futuro no se cierne ninguna nube sobre las acciones del estado”, el gobernador dictó una orden ejecutiva por la que se suspendían las ejecuciones mientras el Departamento de Prisiones llevaba a cabo un “estudio exhaustivo” sobre los procedimientos de ejecución de Tennessee. Está previsto que el director general de prisiones presente su informe al gobernador el 2 de mayo, tan sólo unos días antes de la fecha prevista para la ejecución de Philip Workman.

En cualquier caso, “se cierne una nube” sobre el uso de la pena de muerte por parte de Tennessee, tal como demuestra el nuevo informe del Colegio Estadounidense de Abogados y tal como ilustra el caso de Philip Workman. Las Salvaguardias de las Naciones Unidas para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte prohíben la ejecución en los casos en los que existan “pruebas claras y convincentes” que demuestren la culpabilidad del acusado, “sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos”. Está claro que, en este caso, la ejecución violaría esta norma.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. Estados Unidos ha ejecutado a 1.072 hombres y mujeres desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977. Tennessee ha sido responsable de dos de estas ejecuciones.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen cuanto antes, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- manifestando su apoyo a los familiares, amigos y colegas del teniente Ronald Oliver;
- expresando honda preocupación porque está previsto que Philip Ray Workman sea ejecutado basándose en el falso testimonio del único presunto testigo del incidente;

- subrayando que las pruebas de expertos periciales indican que la herida mortal no fue causada por la bala de Philip Workman;
- haciendo constar que varios miembros del jurado han declarado que no habrían votado en favor una declaración de culpabilidad por asesinato en primer grado contra Philip Workman, y mucho menos en favor de una condena de muerte, si hubieran tenido conocimiento de las pruebas que han surgido desde el juicio;
- señalando que siete jueces federales votaron a favor de que se celebrara una vista probatoria federal sobre este caso, y señalando que un juez de la Corte Suprema de Tennessee ha cuestionado que pudiera pedirse la pena de muerte contra Workman;
- haciendo constar las conclusiones del estudio realizado bajo los auspicios del Colegio Estadounidense de Abogados, unas conclusiones que incluyen la existencia de procedimientos inadecuados para abordar las alegaciones de inocencia;
- pidiendo que se conmute la condena de muerte de Philip Workman;
- pidiendo al gobernador Bredesen que amplíe su suspensión de las ejecuciones, al menos para permitir que se examinen a fondo las conclusiones del Departamento de Prisiones sobre los protocolos de ejecución del estado.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador

Governor Phil Bredesen, Office of the Governor, State Capitol, Nashville, TN 37243-0001, EE. UU.

Fax: +1 615 532 9711

Correo-E.: Phil.Bredesen@state.tn.us

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.